

Jean-Bertrand Aristide

Haití, Presidente de la República (2º ejercicio)

Duración del mandato: 07 de Febrer de 2001 - de de
Nacimiento: Port-Salut, departamento de Sud, 15 de Juliol de 1953
Partido político: Fanmi Lavalás
Profesión: Sacerdote



Resumen

Nacido en el seno de una familia de campesinos pobres del departamento de Sud, en la península del sudoeste, a la edad de tres años quedó huérfano y fue recogido por los padres salesianos, que le dieron la educación primaria. Tras graduarse en 1974 en el Colegio de secundaria Notre Dame de Cap-Haïtien, regentado por la Congregación de la Santa Cruz, completó sus estudios de noviciado en el seminario que la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco tenía en La Vega, en la vecina República Dominicana. Al cabo de un año regresó para estudiar Filosofía y Escolástica en el Gran Seminario Notre Dame de Cazeau y Psicología en la Universidad Estatal de Haití, por la que se licenció en 1979 con una tesina titulada Teología y Política.

Biografía

Aristide ingresó de acólito en la parroquia de Sainte Croix en la localidad de Croix des Missions, y también debutó como locutor de un programa radiofónico religioso, labor en la que mostró sus primeras inclinaciones contestatarias frente al Gobierno despótico de Jean-Claude Duvalier, alias Baby Doc (continuador en 1971 de la feroz dictadura dinástica inaugurada en 1957 por su padre, François Duvalier, alias Papá Doc) y que motivó la intervención de sus superiores salesianos, quienes le instaron a completar su formación en el extranjero con cargo a los recursos de la orden.

Durante seis años, Aristide realizó estudios bíblicos en Roma, Jerusalén y Canadá, estancias que aprovechó para aprender los idiomas italiano, hebreo e inglés, que añadió al español y al portugués que ya conocía, además de sus dos lenguas vernáculas, el francés y el créole, siendo esta última la lengua mestiza ampliamente hablada por las masas negras (en tanto que las clases más acomodadas y la reducida élite burguesa, preferentemente mulata o blanca, habían hecho siempre del francés dejado por los colonizadores europeos uno de sus signos de distinción social).

Entre medio, en julio de 1982, hizo un corto retorno para recibir la ordenación sacerdotal y ejercer su primer magisterio en la parroquia de Saint Joseph que los salesianos regentaban en Croix-des-Bossales, un barrio de Puerto Príncipe. A su regreso definitivo a Haití, en enero de 1985, la orden le encomendó la dirección del programa de estudios de su Escuela Nacional de Artes y Oficios (ENAM) en Puerto Príncipe y la parroquia de Saint Jean Bosco erigida en La Saline, populoso barrio de chabolas de la capital.

Menudo, enteco, de aspecto frágil y tímido, rasgos que acentuaban unos lentes ladeados, el padre Aristide, apodado Titide, alcanzó enorme celebridad en La Saline, trabajando con los feligreses en obras sociales, denunciando en sus homilías la miseria y la explotación de que eran objeto la inmensa mayoría de los haitianos pobres y pregonando la Teología de la Liberación, guitarra en mano y expresándose en créole, todo lo cual le permitió penetrar profundamente en la cultura popular y en la mentalidad, llena de temores, hastío y anhelos, de sus paisanos de color, que acudían en tropel a escucharle. No tardó en convertirse en un personaje conocido en todo el país y del que se hacían eco los corresponsales extranjeros como el más virulento fustigador del orden establecido.

Sus sermones galvanizadores contribuyeron al clima de revuelta popular que consiguió expulsar del poder a Duvalier en febrero de 1986, una vez que el déspota hubiese perdido el favor del Gobierno estadounidense, y a lo largo de 1987 no se cansó de denunciar, en el altar de la iglesia o a pie de calle, encabezando manifestaciones de parroquianos, a la junta militar que desde los sucesos del año anterior presidía el general Henri Namphy, el Consejo Nacional de Gobierno, a la que comparó con "Satán".

Por esta época, Aristide fue objeto de varios intentos de asesinato por paramilitares de extrema derecha, bandas que actuaban impunemente al estilo de los escuadrones de la muerte centroamericanos y que seguían activas a pesar del anuncio de disolución de los temidos y odiados Tontons Macoute, la guardia pretoriana del duvalierismo que había practicado a su antojo el terrorismo de Estado. En agosto de 1987 resultó levemente herido cuando desconocidos detuvieron con una barricada el vehículo en el que él y otros sacerdotes viajaban por una carretera al norte de la capital y a continuación lo incendiaron.

Pero el atentado más conocido y que más indignación generó en las opiniones públicas nacional e internacional se produjo el 11 de septiembre de 1988, días antes del golpe de Estado que reemplazó a Namphy por el general Prosper Avril como el dictador militar de turno, cuando hombres armados con pistolas, machetes y porras asaltaron la parroquia de Saint Jean Bosco, centro del movimiento Ti Église (La Pequeña Iglesia), en pleno servicio religioso: él salvó la vida, pero al menos 13 fieles resultaron muertos y 77 más heridos. En cuanto al edificio, fue pasto de las llamas. La prensa consideró que el bárbaro ataque contra Saint Jean Bosco precipitó la intervención de un sector del Ejército preocupado por el caos político y las condenas internacionales al régimen neodualierista de Namphy.

Las agresiones y las intimidaciones no arredraron al sacerdote, que continuó lanzando diatribas contra la corrupción y los abusos del Gobierno militar, la rapacidad de las clases dirigentes y el abismo socioeconómico que les separaba del pueblo llano. Asimismo, contra lo que él consideraba una política imperialista de Estados Unidos hacia su país. Su oratoria encendida se escuchaba también en la radio, y la emisora Radio Soléil se convirtió en el altavoz permanente de sus sermones, que vieron así multiplicada su audiencia, y de sus llamamientos a resistir con la no violencia a los "criminales en el poder".

Este intenso activismo, descrito como revolucionario de izquierdas, era más de lo que la jerarquía católica estaba dispuesta a tolerar, así que sólo había transcurrido un mes desde la masacre de Saint Jean Bosco cuando Aristide recibió una misiva directamente desde la casa central de la Sociedad Salesiana en Roma en la que se le ordenaba abandonar su misión pastoral en Haití y trasladarse a Canadá.

Confortado por miles de seguidores que salieron a manifestarse en su apoyo, Aristide rehusó dejar el país. En diciembre de 1988, la orden salesiana -al parecer, por instigación del nuncio apostólico en Puerto Príncipe- reaccionó ante esta rebeldía expulsándose de su seno con el argumento de que estaba "incitando al odio y la violencia", si bien respetó su estatus clerical, el cual sólo podía suspender el Vaticano, y ese castigo -pese a lo divulgado habitualmente por los medios de comunicación- nunca se produjo. Aristide continuó siendo un sacerdote, bien que privado de las funciones ministeriales, a menos que ingresara en otra orden o se incardinara como cura diocesano, pasos que tampoco tomó.

Aunque no podía ejercer la labor pastoral, Aristide siguió participando en actividades religiosas y benéficas al frente del hogar de acogida para huérfanos La Fanmi Se Lavi (La Familia es la Vida). Más aún, se dedicó abiertamente al activismo político, multiplicando los mensajes de esperanza y de unidad en las barriadas negras, y criticando al régimen castrense de Avril y luego al ejecutivo cívico-militar de transición tutelado por el general Hérard Abraham, el cual,

cosa insólita en un alto mando militar haitiano, se avino a abrir un proceso democrático sin subterfugios fraudulentos ni excesos represivos.

El 18 de octubre de 1990 Aristide aceptó presentarse a las elecciones presidenciales convocadas por la presidenta interina, Ertha Pascal-Trouillot, como el candidato de Lavalás (palabra créole que denomina al torrente que baja de la montaña después de una tormenta, que todo lo lava), un movimiento prodemocracia que aglutinaba a asociaciones cívicas, elementos eclesiásticos, sindicatos y partidos y organizaciones de la izquierda no comunista, el más importante de los cuales era el Frente Nacional para el Cambio y la Democracia (FNCD), a su vez una coalición encabezada por el Comité Nacional del Congreso de Movimientos Democráticos (Konakom), de talante socialdemócrata y con Víctor Benoît de líder.

En las trascendentales elecciones presidenciales del 16 de diciembre de 1990, primeras plenamente democráticas en los 187 años de historia de Haití como Estado independiente, Aristide mostró a las claras la inmensa popularidad de que gozaba en las capas más desfavorecidas de la población y arrolló con el 67,5% de los votos a una decena de aspirantes, el más adelantado de los cuales fue, con el 14,2% de los sufragios, Marc-Louis Bazin, político conservador del agrado de Estados Unidos, líder del Movimiento para la Instauración de la Democracia en Haití (MIDH), unido exclusivamente para esta liza con el Partido Nacionalista Progresista Revolucionario (PANPRA) en el seno de la Alianza Nacional para la Democracia y el Progreso (ANDP). En tercer lugar quedó Louis Dejoie, del Partido Agrícola e Industrial Nacional (PAIN). En las legislativas, que requirieron una segunda vuelta el 20 de enero, el FNCD obtuvo una mayoría simple de 27 diputados sobre 83, seguido por la ANDP con 17 y el PAIN con 6.

Aristide tomó posesión de su mandato quinquenal el 7 de febrero de 1991, 30 días después de frustrar el Ejército leal a las órdenes de Abraham un movimiento golpista de inequívoco sello involucionista: el cabecilla de la intentona, que provocó una ola de represalias criminales contra elementos ultraderechistas de los encolerizados partidarios del presidente in pectore, fue Roger Lafontant, ministro del Interior y jefe de los Tontons Macoute bajo Jean-Claude Duvalier.

Como jefe del Estado, Aristide aparcó provisionalmente los contenidos más radicales de su mensaje político y solicitó la cooperación de Estados Unidos y de Francia, consciente de lo abrumador de la empresa a la que se había comprometido ante sus esperanzados seguidores: no ya terminar, sino reducir las injusticias sociales y la espantosa miseria del país "a un nivel digno de pobreza", y para eso hacía falta dinero exterior, ya que las arcas del Estado estaban exangües y podar el presupuesto del Ejército que integraban 7.000 uniformados resultaba peligroso.

Entonces, Haití era con diferencia el país menos desarrollado de América y sus indicadores sociales presentaban un cuadro más deplorable que el de varios estados de África subsahariana: la esperanza de vida andaba en los 56 años, la tasa de mortalidad infantil rozaba el 10%, el analfabetismo afectaba al 53% de la población adulta y el PIB dividido por cada uno de sus 6,5 millones de habitantes daba un cociente de 400 dólares. Para colmo de males, la exigua economía formal, basada en la exportación de productos agrícolas con precios inestables en los mercados internacionales -cacao, café, azúcar de caña- y en una incipiente industria de manufacturas subcontratadas destinadas también a los mercados foráneos, estaba

en recesión y la inflación alcanzaba el 25%.

Revestido de poderes especiales por la Asamblea Nacional y respaldado por el FNCD y algunas formaciones menores, Aristide formó un gobierno a cuyo frente colocó al dirigente del FNCD René Préval y planteó una serie de actuaciones urgentes para dignificar las condiciones de los trabajadores (introducción del salario mínimo), emprendió una campaña de alfabetización y propició una drástica reducción de las violaciones de los Derechos Humanos. Existía una gran confianza en la gestión del antiguo salesiano, ahora que los proveedores internacionales - gobiernos como el francés y el estadounidense, y organizaciones como la Comunidad Europea, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-, respondían positivamente a los llamamientos del presidente y desbloqueaban partidas de ayuda al desarrollo, líneas de crédito y subvenciones al comercio.

Sin embargo, como se vio en la intentona de Lafontant, el movimiento de reacción empezó incluso antes del traspaso de poderes. La élite económica y el estamento militar, impregnados de conservadurismo, siempre habían temido las promesas redentoristas del padre Aristide, y ahora que el eclesiástico metido a estadista tenía el mando político, avizoraban un gran peligro para sus privilegios.

En las semanas y meses que siguieron a la asunción presidencial, un rosario de denuncias de complots, motines de unidades policiales y militares, y detenciones de antiguos tontons macoute del círculo de Lafontant con aviesas intenciones fue tensando el ambiente y brindó la antesala propicia para el golpe de Estado. Las apelaciones por Aristide y miembros del Gobierno a los militantes del FNCD y las masas populares, que sin necesidad de ser espoleadas desde arriba ya exteriorizaban su ansiedad de mejoras en sus maltrechos estándares de vida, para que defendieran en la calle a las autoridades legítimas sirvieron para disparar los miedos de los poderes fácticos sobre una revolución social inminente.

Así, el 30 de septiembre de 1991, a menos de ocho meses de llegar a la Presidencia, Aristide fue derrocado en un sangriento golpe de Estado dirigido por el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Raoul Cédras, quien justificó la acometida porque había que "pararle los pies a este aprendiz de dictador". Capturado inmediatamente en el Palacio Nacional por los soldados, en los que afloró algún amago de lincharle, el mandatario derrocado fue al punto liberado y al día siguiente por la mañana se subió a un avión enviado por el gobierno de Venezuela y emprendió el camino del exilio con primera parada en Caracas, donde el presidente Carlos Andrés Pérez le acogió con los brazos abiertos.

El fatal ciclo de los gobiernos truncados por la fuerza de las armas, y últimamente envenenado por una herencia duvalierista que no terminaba de resolverse, había retornado a Haití; la penúltima defenestración de un mandatario civil se remontaba a tres años atrás, en junio de 1988, cuando Leslie Manigat, elegido con fraude, con una abstención superior al 90% y bajo un clima de terror en las elecciones de enero de aquel año, fue despedido del cargo por el mismo hombre que le había impulsado, el general Namphy, quien no toleró ser destituido por Manigat como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Ahora, Aristide, sin embargo, no tenía ninguna intención de resignarse a su remoción y de aceptar los hechos consumados, máxime cuando el golpe concitó la condena universal de los gobiernos amigos y de las organizaciones internacionales de las que Haití era miembro, empezando por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM), esta última integrada por los estados anglófonos de la zona. La OEA decretó al instante un embargo comercial y el Gobierno de Estados Unidos ordenó la congelación de los fondos haitianos en su territorio.

Tan solo dos días después del golpe, Aristide voló a Washington, donde se cercioró de que la OEA y la ONU seguían considerándole el presidente legítimo y donde hizo un llamamiento a la resistencia civil y no violenta de los haitianos, sobre los que empezó a abatirse una terrible represión. Cientos de sus partidarios fueron asesinados por paramilitares y soldados a lo largo y ancho del país. En la degollina perecieron también, en confusas circunstancias, personajes dispares como Lafontant, asesinado en la penitenciaría donde cumplía cadena perpetua, y Sylvio Claude, líder del Partido Demócrata Cristiano de Haití (PDCH), quemado vivo por las turbas, al parecer militantes del FNCD que le señalaron como una de las conexiones civiles del golpe.

El 8 de octubre la junta de Cédras obligó a la Asamblea Nacional a declarar formalmente destituido a Aristide y a nombrar al magistrado Joseph Nerette como presidente provisional. Tres días después fue designado un primer ministro interino, Jean-Jacques Honorat, dos dignatarios de paja a los que nadie reconoció en el exterior.

La restauración de Aristide en el poder, que se antojaba ineluctable porque la comunidad internacional en bloque, con un prurito legalista nunca observado antes frente a cualquiera entre las docenas de golpes de Estado que habían acabado con gobiernos democráticos en países en desarrollo en las últimas décadas, no estaba dispuesta a aceptar un statu quo político dictado por los militares, ahora que los procesos democráticos habían culminado en todo el continente (salvo en Cuba).

El Gobierno de George Bush en Estados Unidos no simpatizaba especialmente con Aristide, pero estaba muy preocupado por la llegada a sus costas de boat people haitianos, huyendo del caos de inseguridad instalado en la isla, y no quería ninguna dictadura en el Caribe que perjudicara la política de acoso al régimen castrista. Con todo, el proceso fue muy tortuoso y, al final, la actitud recalcitrante de Cédras y sus secuaces en el triunvirato de facto que detentaba el poder, el general Philippe Biamby y el teniente coronel de la Policía Joseph-Michel François, no dejó otra salida que imponer la solución manu militari.

Las diplomacias de Francia, Estados Unidos y Venezuela, y las delegaciones y enviados especiales de la ONU y la OEA se involucraron en una serie de rondas de negociación con los golpistas y los representantes de los partidos parlamentarios que habían acogido con indisimulada satisfacción el golpe o que aspiraban a desarrollar un papel neutral y conciliador para la resolución de la crisis, en algunas de las cuales participó personalmente Aristide como parte interesada. Las conversaciones buscaron fórmulas de consenso para el retorno del orden constitucional sobre la base de un nuevo gobierno multipartito, pero fracasaron una y otra vez en torno al mismo punto: el retorno de Aristide al país y al poder.

Las acciones unilaterales de los golpistas y sus colaboradores políticos civiles estorbaron también al único desenlace que aceptaban Aristide y la OEA. Así, en junio de 1992 las dos cámaras de la Asamblea Nacional, con el boicot del FNCD, invistieron como nuevo primer ministro (y presidente de la República en funciones) a Bazin, que el 19 de ese mes formó un gabinete ministerial con cuadros del MIDH y el PANPRA. Aristide se apresuró a declarar nula y sin efecto la mudanza institucional, lo que empezó a irritar a la administración Bush, que concedía importancia sobre todo al regreso del orden y la estabilidad al país caribeño, con o sin, por el momento, Aristide al mando. Pero la llegada a la Casa Blanca de la administración demócrata de Bill Clinton en enero de 1993 significó una mayor implicación en la crisis por Estados Unidos, que se arrogó un papel señero de mediador dispuesto a hacer cumplir los acuerdos firmados.

En febrero de 1993 las presiones generalizadas arrancaron del Gobierno de Bazin y la junta que lo manejaba un acuerdo de principio sobre la presencia de 200 observadores de la ONU. El compromiso cayó en saco roto. El 16 de marzo Aristide fue recibido con carácter privado por Clinton en Washington. El 15 de junio, como gesto de buena voluntad, la Asamblea haitiana aprobó una resolución por la que reconocía a Aristide como el presidente legítimo, si bien la reposición era simbólica y además estaba condicionada a la designación de un primer ministro aceptable para las partes, a la vigencia de todas las decisiones políticas y administrativas adoptadas desde el 30 de septiembre de 1991 -entre ellas, el nombramiento de Cédras como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y las elecciones senatoriales parciales de enero de 1993, ganadas por la antigua oposición-, a garantías de concesión en su momento de una "amnistía general" y a que el estadista obtuviera de la comunidad internacional el levantamiento de las sanciones. La ONU no se sintió impresionada por este movimiento, y justamente al día siguiente el Consejo de Seguridad resolvió imponer a Haití un embargo petrolero y financiero.

Parecía abrirse camino la solución negociada. El 27 de junio Aristide y Cédras, aunque sin verse las caras, arrancaron en Governor's Island, Nueva York, unas conversaciones preliminares facilitadas por el enviado especial de la ONU, el ex canciller argentino Dante María Caputo, y el Gobierno estadounidense. El 3 de julio quedó ultimado un documento de "paz" al pie del cual estamparon sus firmas Cédras y, al día siguiente, Aristide. Los acuerdos de Governor's Island establecían el regreso de Aristide a Haití para el 30 de octubre después de nombrar a un primer ministro de su gusto, aunque precisaría la ratificación parlamentaria. Cédras y François tendrían que darse de baja del Ejército y la Policía, respectivamente, y el Consejo de Seguridad de la ONU procedería al levantamiento de las sanciones, cosa que sucedió el 27 de agosto; tres días después se instaló en Puerto Príncipe el jefe de Gobierno escogido por Aristide, el empresario sin filiación Robert Malval.

El proceso presentaba una traza positiva. El 6 de septiembre Aristide aprovechó el compás de espera para ser recibido en el Elíseo por François Mitterrand, en la primera visita oficial de un mandatario haitiano a la antigua metrópoli colonial nada menos que desde la independencia en 1804, y el 23 del mismo mes el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío de una Misión de 1.500 policías civiles (MINUH) con la misión de asistir a las autoridades locales en la implementación de los acuerdos. Pero cuando la MINUH se disponía a desembarcar, el 11 de octubre, los partidarios de la junta, esgrimiendo armas y profiriendo amenazas en las mismas instalaciones portuarias, crearon un clima de inseguridad tal que imposibilitó la operación. Sin solución de continuidad, una nueva oleada de terror, con asesinatos y hostigamientos, se cebó en los simpatizantes de Aristide y en los miembros del Gobierno Malval, uno de los cuales, el titular de Justicia Guy Malary, fue acribillado a balazos el 14 de octubre. Medios de comunicación audiovisuales y escritos fueron intervenidos o censurados.

El desafío de Cédras y su gente condujo el restablecimiento de las sanciones de la ONU el 13 de octubre, al bloqueo naval por unidades de la Armada de Estados Unidos tres días después y, finalmente, a la imposición del embargo total por el Consejo de Seguridad el 6 de mayo de 1994, medida solicitada por Aristide con la alegación de que, dada la extrema penuria que padecía el pueblo, los únicos perjudicados por la interrupción del trasiego comercial serían los golpistas y sus familias. El 12 de mayo el octogenario juez Émile Jonassaint, presidente de la Corte de Casación del Tribunal Supremo, fue colocado por los militares como presidente provisional títere y los ministros de Malval vieron usurpados sus despachos por personal adicto al régimen. En las calles, milicianos del Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso en Haití (FRAPH), organización político-paramilitar puesta al servicio de la junta, intensificaron sus amenazas y bravatas.

Ante este sombrío panorama, Aristide negó cualquier posibilidad de negociación y solicitó a la comunidad internacional la intervención militar inmediata como el único modo de restaurar la constitucionalidad y detener las violaciones de los Derechos Humanos. El cansancio y la frustración por el enroque del triunvirato golpista se adueñaron también del Consejo de Seguridad de la ONU y de la administración Clinton, ésta, además, alarmada por la salida masiva de balseros con destino a la base militar de Guantánamo, en Cuba.

Como resultado, el 31 de julio de 1994 el Consejo de Seguridad, por la resolución 940, autorizó la creación de una Fuerza Multinacional (FMN) de 21.000 soldados -el 90% estadounidenses- para reponer a Aristide por la fuerza. La FMN sería en su momento reemplazada por la MINUH, ampliada a los 6.000 efectivos y convertida en una operación de mantenimiento de la paz a tal efecto. La decisión del máximo órgano responsable de la seguridad internacional era histórica, ya que nunca antes la comunidad internacional se había movilizado con medios bélicos para revertir un golpe de Estado, mientras que para Estados Unidos suponía además su primera intervención militar en el continente contra un régimen derechista en beneficio de un líder que objetivamente podía calificarse de izquierdista.

La invasión, denominada Operación Restore Democracy (Restaurar la Democracia), comenzó el 19 de septiembre sin encontrar oposición alguna, pues Cédras, a través de Jonassaint, había pactado horas antes con el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, en misión de urgencia en Puerto Príncipe, garantías de una amnistía total previa a la llegada de Aristide. No obstante, los actos de violencia cometidos por elementos del FRAPH contra los enfervorizados seguidores del presidente obligaron a las tropas norteamericanas a imponer el orden y desarmar a los paramilitares.

Aislados, Cédras, Biamby y François partieron con sus familias al exilio en Panamá y la República Dominicana el 13 de octubre, un día después de dimitir Jonassaint, mientras que Malval y sus ministros tomaban posesión de los puestos de que habían sido desalojados en mayo. El 15 de octubre Aristide regresó triunfalmente a Puerto Príncipe desde Washington, escoltado por una comitiva de altos cargos estadounidenses, con el secretario Warren Christopher a la cabeza, y entre el delirio de decenas de miles de seguidores. Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad de la ONU anulaba el régimen de sanciones. En los días siguientes, el presidente formó un Gobierno de coalición con inclusión del MIDH y a cuyo frente colocó al independiente Smarck Michel, y, sometiendo a las presiones del Vaticano, anunció la colgadura formal de los hábitos religiosos -jurídicamente, había seguido siendo sacerdote, aunque suspendido- como símbolo de renuncia al radicalismo revolucionario que aún pudiera achacársele. Consciente de que su restitución debía todo a la ayuda de Estados Unidos,

Aristide multiplicó los llamamientos a la no violencia y a la reconciliación nacional, una actitud cautelosa que mereció los elogios de las cancillerías extranjeras.

Para prevenir futuras intentonas golpistas y eliminar una amenaza inveterada al Estado de derecho haitiano, el presidente decretó la disolución de las Fuerzas Armadas, a las que se refirió como un "cáncer", y la creación, supervisada por la MINUH, de una Policía Nacional civil de Haití (PNH) de 6.000 efectivos. Por lo demás, la situación de la seguridad se fue normalizando. El 31 de marzo Aristide recibió en Puerto Príncipe a Clinton y al secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, en la víspera de la ceremonia de la transferencia del mando de la FMN a la MINUH. 2.400 soldados del contingente estadounidense se quedaron como personal de la MINUH, hasta la celebración de nuevas elecciones

Los comicios legislativos se celebraron a tres vueltas el 25 de junio, el 23 de julio y el 17 de septiembre de 1995. A pesar de la supervisión de los 180 observadores de la OEA y de la vigilancia de los cascos azules, los policías internacionales de la MINUH y la PNH, se registraron numerosas irregularidades y el proceso resultó en su conjunto sumamente confuso y bronco. Algunas de las irregularidades fueron meros errores de organización, pero otras (intimidaciones, destrucción de papeletas, quema de urnas) constituyeron manipulaciones en toda regla que para la oposición estaban destinadas a favorecer la lista oficialista Plataforma Política Lavalás, liderada por el nuevo partido montado por los partidarios del presidente, la Organización Política Lavalás (OPL), y también integrada por el Movimiento de la Organización del País (MOP) y el Partido Louvri Barye (PLB).

En una mudanza preocupante que vaticinaba turbulencias políticas, el FNCD, otrora pilar de Aristide, concurrió enfrentado con el presidente y a la hora de denunciar las violaciones del procedimiento electoral no se mordió la lengua. Uno de sus líderes, Evans Paul, notorio tribuno de la resistencia a la dictadura de Cédras y que hasta hacía muy poco había sonado como el probable sucesor de Aristide, resultó derrotado en la reelección como alcalde de la capital. Por su parte, el MIDH de Bazin y el Movimiento por la Reconstrucción Nacional (MRN) de René Theodore se sumaron al boicot. Finalmente, la OPL y sus aliados conquistaron una mayoría absoluta de 68 diputados y 17 senadores, abultada cuota de poder legislativo, de ribetes hegemónicos, que, manipulaciones aparte, volvía a demostrar el masivo respaldo ciudadano al ex sacerdote pero que produjo también inquietud en una oposición fragmentada y con dificultades para implantarse en los estratos populares.

El 16 de octubre dimitió el primer ministro Michael por las reticencias de Aristide a adoptar el programa de austeridad demandado por el FMI como condición para conceder a Haití un crédito stand-by. Su sustituta fue la ministra de Exteriores, Claudette Werleigh, personalidad más dúctil a los deseos del jefe del Estado. Dio la sensación de que Aristide no quería erosionar su vasta base de apoyos dando el aval una decisión económica ciertamente perentoria pero impopular, ahora que se acercaba el final de su mandato. No sin reticencias, el antiguo eclesiástico aceptó no descontar de su período presidencial los años pasados el exilio y, de entrada porque se lo impedía la Constitución, no se postuló para el segundo mandato consecutivo en las elecciones presidenciales celebradas el 17 de diciembre de 1995. Boicoteadas por la mayor parte de la oposición (MIDH, MRN, PANPRA, FNCD), crecientemente hostil al oficialismo, y validadas por los monitores internacionales, las votaciones fueron ganadas por el candidato de la OPL, el ex primer ministro Préval, que barrió con el 87,9% de los votos a 13 contrincantes. La bajísima participación, el 28%, puso el nubarrón a la jornada democrática.

El 7 de febrero de 1996, 18 días después de contraer matrimonio con Mildred Trouillot, abogada haitiana y estadounidense de adopción que le había servido como asesora legal durante el exilio, Aristide entregó los atributos presidenciales a Préval. La efeméride sería recordada como el primer traspaso entre presidentes elegidos democráticamente en Haití. Con sus cotas de popularidad intactas, el ex mandatario continuó presente en la vida política nacional y en un primer momento lo hizo discretamente, pasando la mayor parte del tiempo en su villa al norte de Puerto Príncipe dedicado a formar una familia.

No obstante, la restauración del diálogo crediticio entre el Gobierno y el FMI, y, ligado a ello, el anuncio por el presidente de un plan de racionalización económica consistente en la privatización de empresas del Estado deficitarias, la reducción de la plantilla de funcionarios y la organización de un sistema tributario moderno, sumieron al partido del poder en una grave crisis interna que enfrentó a los partidarios de Préval y a un nutrido sector radicalizado cuyo caudillo natural no podía ser sino Aristide. La escisión era imparable y en noviembre de 1996, el mes en que nació la primera de sus dos hijas, Christine, el ex presidente bendijo la creación de Fanmi Lavalás (Familia Lavalás, FL), partido que debía allanar el terreno para su regreso a la Presidencia en las próximas elecciones y que se concentró en regatearle parcelas de poder a la OPL.

La FL participó en las elecciones del 6 de abril de 1997 que debían renovar los consejos locales y 11 escaños de la Asamblea Nacional, nueve del Senado y dos de la Cámara de Diputados. La segunda vuelta, prevista para el 22 de abril, no llegó a celebrarse en medio de una fenomenal polémica por las acusaciones opositoras al Consejo Electoral de parcialidad en favor de la FL. El 9 de junio siguiente, el primer ministro Rony Smarth presentó la dimisión haciéndose eco de aquellas denuncias y como protesta también por las interferencias de Aristide en el proceso de diálogo con el FMI. En octubre de 1999 el ex presidente obligó a Préval a cesar al ministro de Seguridad Pública, Robert Maurel, al que unas amenazas de muerte le aconsejaron abandonar el país.

La FL hizo la más contundente demostración de arraigo popular en las legislativas del 21 de mayo y el 30 de julio de 2000, acaparando nada menos que 72 de los 82 diputados y 26 de los 27 senadores, aunque en virtud también al boicot general de la oposición, que volvió a poner el grito en el cielo por las intimidaciones que realizaban a su antojo los prosélitos de Aristide. Los partidos opositores se negaron a participar en la segunda ronda y los monitores de la OEA también rehusaron supervisarla, después de que el presidente del Consejo Electoral se viera obligado a renunciar y, acto seguido, a poner tierra de por medio, ante los ataques de que fue objeto por Aristide y de Préval por negarse a avalar el primer escrutinio. En cuanto al partido de Préval, ahora llamado Organización del Pueblo en Lucha (OPL), quedó completamente laminado por la FL y sólo obtuvo un diputado.

El caso fue que las legislativas, en los resultados y en las vicisitudes, se entendieron como el anticipo de las presidenciales del 26 de noviembre. Dicho y hecho, Aristide avasalló con el 91,8% de los votos a seis rivales, ninguno de los cuales tenía entidad. Todos los cabezas de facción con cierto relieve se desentendieron de un proceso cuyo resultado estaba cantado de antemano, mientras que la comunidad internacional, decepcionada por la negativa de las autoridades a revisar el recuento de los comicios de mayo, decidió no enviar observadores. El Consejo Electoral Provisional informó sobre un nivel de participación del 60%, pero nadie fuera del oficialismo aceptó esta cifra; según la oposición, el índice real no había excedido el 10%, lo que convertía a la elección en una "farsa".

Inasequible a las preocupaciones, Aristide declaró que su propósito era traer la "paz en la mente y en la tripa" a todos los haitianos y "construir una nación de amor enraizada en la democracia", nada más lejos de la intención, imputada por sus enemigos, de planear la implantación de una "dictadura". El 7 de febrero de 2001 el azaroso periplo vital de Aristide comenzó una nueva etapa con la inauguración de su segundo mandato presidencial de cinco años, acto que resultó deslucido por el bajo nivel de las representaciones exteriores (embajadores, fundamentalmente): el único dirigente que asistió fue el primer ministro de Belice, Said Musa. El mismo día, la ONU cerró en Puerto Príncipe su Misión Internacional Civil de Apoyo (MICAH), que desde marzo de 2000 había asesorado al Gobierno haitiano en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y en la observancia de los Derechos Humanos.

Aristide regresaba a la jefatura del Estado con la comunidad internacional mal encarada y la mayor parte de la ayuda al desarrollo y las líneas de crédito en suspenso y condicionadas a la normalización política. Recuperar la confianza de los donantes foráneos, apaciguar a los partidos de la oposición, arreglar la parálisis institucional y poner orden en las calles, donde los ramalazos de pistolero político convivían con una explosión del crimen organizado y la delincuencia común, eran cuatro labores urgentes a las que se sumaba una necesidad no menos perentoria: dar satisfacción a los millones de depauperados que, con desesperación creciente, habían visto en los últimos 15 años sucederse las dictaduras y los gobiernos elegidos sin notar la mínima mejora en sus deplorables condiciones de vida.

Según un reciente estudio de la ONU, el 80% de los haitianos estaba desempleado o subempleado, y dos terceras partes tenían una dieta alimenticia que no cubría sus necesidades nutricionales básicas. Muy vago sobre las recetas que pensaba aplicar, durante la campaña electoral Aristide habló de crear medio millón de puestos de trabajo, aunque nadie sabía cómo podría realizarse tal cosa en ausencia de inversiones públicas o privadas, y no aclaró si iba a dejar atrás su hostilidad a las fórmulas fondomonetaristas para insuflar oxígeno a los agudos déficits contables y poner coto a la inflación, que volvió a escalar por encima del 10%. Todo ello, en una coyuntura de desplome económico: el año iba a terminar con un crecimiento negativo del PIB del 1,7%, mientras que el crecimiento demográfico andaba por el 1,3%.

El cúmulo de problemas era ingente y las circunstancias que rodearon a la investidura del nuevo ejecutivo no invitaron al optimismo. De entrada, 15 partidos de la oposición agrupados bajo el paraguas de la Convergencia Democrática (CD) y capitaneados por Evans Paul advirtieron que no reconocían la legitimidad de Aristide y ya el mismo 7 de febrero celebraron un acto paralelo en el que eligieron "presidente provisional" al ex ministro de Justicia y activista humanitario Gérard Gourgue, y reiteraron su demanda de nuevas elecciones legislativas en el más breve lapso. Como consecuencia de este desafío, la CD no fue invitada a participar en las conversaciones para la formación del nuevo Gobierno de Jean-Marie Chérestal (FL), que tomó posesión el 2 de marzo y que, paradójicamente, incluyó a personalidades conservadoras como Bazin, para la cartera de Planificación y Cooperación Internacional, e incluso a viejos nombres del duvalierismo, teóricamente reconvertidos a los hábitos democráticos.

El nombramiento de Chérestal, servidor público con amplia experiencia ministerial y en la interlocución económica con el extranjero, fue visto como una apuesta de Aristide para obtener el desbloqueo de los fondos internacionales por valor de 500 millones de dólares, suma equivalente al 172% del conjunto de las exportaciones haitianas. En parte para congraciarse con el FMI, en parte porque no había otro remedio ante el agotamiento de las arcas públicas, el

Gobierno continuó la política de la administración precedente de ir liberalizando los precios subsidiados de ciertos productos básicos al tiempo que intentaba mantener a flote las campañas de lucha contra el SIDA y el analfabetismo. Mientras las delegaciones negociaban fatigosamente en las palestras internacionales, en casa, Aristide se las vio y se las deseó para capear una inagotable sucesión de disturbios, asaltos, sediciones y agitaciones violentas de toda laya que abocaron al país al callejón sin salida.

El 28 de julio de 2001, hombres armados y vestidos con ropas de camuflaje, presuntamente antiguos oficiales del Ejército, atacaron tres estaciones policiales en otras tantas localidades del norte y el sur así como la Academia de la PNH en Puerto Príncipe, matando a cinco agentes. En noviembre, la norteña Cap-Haïtien, segunda ciudad del país, vivió dos jornadas de huelga general convocada por la CD y que terminó en serios desórdenes públicos. Al cabo de un mes, el 17 de diciembre, un comando formado por una treintena de hombres penetró en el Palacio Nacional cuando Aristide no se hallaba en el edificio y se abrió paso a tiro limpio antes de ser rechazado por el servicio de seguridad. Ocho personas resultaron muertas en la refriega, entre rebeldes, defensores y transeúntes, y a su término, miles de encolerizados militantes de la FL, algunos portando machetes y armas cortas de fuego, salieron a la caza y captura de los rebeldes en fuga, a cuatro de los cuales dieron muerte cerca de la frontera dominicana. La furia vengativa de estos exaltados no se detuvo ahí y la emprendieron también, con total impunidad, con inmuebles de los partidos opositores.

El poder habló de un intento de golpe de Estado de elementos desmovilizados del Ejército y de la propia PNH, y en particular señaló al ex comisario Guy Philippe, destituido el año anterior por Préval bajo la acusación de conspirar y que en lo sucesivo, desde su exilio a caballo entre la República Dominicana y Ecuador, iba a proyectar su sombra amenazadora. Puerto Príncipe reclamó a las autoridades de Santo Domingo la entrega de Philippe cuando tuvieron constancia de que el fugitivo se ocultaba en el país vecino, y la visita de Aristide al presidente Hipólito Mejía el 16 de enero de 2002 estuvo centrada en este punto, aunque el mandatario haitiano se fue con las manos vacías. Por lo demás, en las redadas que sucedieron a la intentona fue detenido el ex coronel Guy François, un oficial que había conspirado para derrocar a Avril en 1989. Los dirigentes de la oposición civil se desentendieron de los sucesos del 17 de diciembre y los valoraron como la excusa ideal del Gobierno para intentar silenciarles a ellos.

No habían transcurrido 48 horas desde la decepcionante entrevista en Santo Domingo cuando Chérestal, dignatario muy impopular en las bases de la FL, envió la carta de dimisión a Aristide como resultado del cúmulo de críticas de que venía siendo objeto dentro y fuera del oficialismo por su incapacidad para revertir las fortunas económicas; más aún, se le acusaba de enriquecimiento ilícito con motivo de la reciente adquisición para su disfrute de una residencia valorada en 1.700.000 dólares, un dispendio que a los parlamentarios les parecía intolerable.

El 14 de marzo la Asamblea invistió al hombre de toda confianza designado por Aristide, Yvon Neptune, hasta ahora presidente del Senado y presidente en funciones de la FL, considerado un duro del oficialismo. En el primer aniversario del inicio del mandato, poco o nada había que celebrar. Para entonces, un buen número de intelectuales, activistas sociales y antiguos compañeros de luchas políticas habían abandonado a Aristide, que empezó a endurecer su discurso contra la oposición y a culpabilizar al "terrorismo económico" de los gobiernos extranjeros por el marasmo general, si bien aquellos dejaron claro que no habría ayuda hasta que Gobierno y oposición se pusieran de acuerdo sobre la celebración de nuevas elecciones

legislativas.

El caso era que cada vez más malhechores cometían sus delitos invocando al presidente, quien parecía no querer reaccionar ante los desmanes cometidos en su nombre, aunque por otro lado no resultaba fácil discernir dónde empezaba el delito común camuflado de acción partidista y dónde la violencia política espontánea o planificada dirigida contra quienes eran considerados enemigos. La PNH acaparó buena parte de las denuncias de brutalidad, corrupción y tráfico de drogas -un porcentaje sustancial y creciente de la cocaína colombiana en tránsito a Estados Unidos hacía escala en Haití-, y se convirtió en objeto de luchas de poder por los diversos grupos políticos que aspiraban a controlar la única fuerza armada del país.

La muestra más convincente de la progresiva deriva autoritaria de la presidencia de Aristide fue la persecución desatada por bandas presuntamente incontroladas contra periodistas y comunicadores críticos con el poder, algunos de los cuales fueron asesinados y otros más tuvieron que abandonar el país. Estas violaciones de los Derechos Humanos se venían produciendo desde el último año de la administración de Préval, pero ahora adquirieron tal gravedad que la ONG Reporteros Sin Fronteras actualizó su lista de gobernantes "predadores" de la libertad de prensa con la inclusión de Aristide, que pasó a compartir este deshonor con dictadores y autócratas de todo el mundo.

El 5 de julio Aristide se apuntó un importante tanto en sus esfuerzos para romper el aislamiento exterior que atenazaba a Haití con el ingreso en la CARICOM, decisión tomada por el núcleo de países miembros anglófonos con un criterio más político que económico, ya que el empobrecido país francófono, con una renta per cápita diez veces menor que las de Bahamas o Barbados y urgentemente necesitado de ayuda, en poco podía contribuir al desarrollo del mercado común de este bloque caribeño. De todas maneras, una de arena y otra de cal, puesto que pocos días después, el secretario general adjunto de la OEA, Luigi Einaudi, arrojó la toalla en sus intentos de sentar en una mesa de diálogo a Gobierno y oposición. La CD dejó muy claro que a menos que Aristide desarmara a sus partidarios y los autores de los ataques a sus sedes fueran llevados ante la justicia, no habría nada que negociar. Fracasaba así la tercera misión de Einaudi en lo que iba de año.

A principios de agosto Aristide encajó un nuevo y serio sobresalto con la caída temporal de Gonaïves, cuarto núcleo urbano del país, bajo el control de una muchedumbre armada que acorraló a los efectivos policiales leales al Gobierno, prendió fuego al ayuntamiento y el tribunal local de justicia, y llamó a la insurrección nacional. Los medios de comunicación identificaron a algunos revoltosos como antiguos seguidores del sacerdote salesiano que se consideraban "traicionados" por éste al acordarse de ellos únicamente para que le sirvieran como tropa de choque contra la oposición.

Dato muy inquietante para el Gobierno, a la cabeza de los disturbios de Gonaïves estuvo Amiot Métayer, conocido cabecilla de una banda de violentos relacionados con el narcotráfico de tremebundo nombre, el Ejército Caníbal, cuyos servicios represivos había prestado a Aristide hasta que éste ordenó su arresto y encarcelamiento en relación con los incendios provocados que siguieron al fallido golpe del 17 de diciembre del año anterior. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, los ministros Bazin y Jean-Baptiste Brown, titular de Justicia, resignaron el 20 y

el 29 de septiembre, respectivamente. La pérdida por Aristide de estos dos políticos respetados y moderados sólo podía hacer más difícil el entendimiento con la CD.

En noviembre de 2002 la agitación antigubernamental se trasladó de nuevo a Cap-Haïtien, escenario de manifestaciones más nutridas de lo habitual que, galvanizadas por el vehemente Evans Paul, exigieron lisa y llanamente la dimisión de Aristide y su ingreso en prisión por "ladrón" y "dictador". En el propio Puerto-Príncipe se desarrollaron protestas de los estudiantes por las injerencias del Ministerio de Educación en los órganos de gobierno de la Universidad y la subida de las tasas académicas. La nueva oleada de malestar se nutría del reciente derrumbe de un esquema piramidal de inversiones, que dejó sin los ahorros de toda una vida a decenas de miles de haitianos, y del imparable encarecimiento de la cesta de la compra, con la moneda nacional, el gourde, devaluado un 40% en los últimos doce meses. Los rumores de que el Gobierno se disponía a atajar la crisis de liquidez del Estado y el desplome monetario mediante la conversión a gourdes de los depósitos bancarios en dólares y rentados con un tipo de interés superreducido desató una cascada de reintegros en metálico: en tan sólo tres días, las cajas de los bancos vieron esfumarse 20 millones de dólares, con el consiguiente agravamiento de la penuria financiera.

Un cierto clima de polarización social y de enfrentamiento civil, a semejanza, -aunque menos cívico y más descontrolado- del vivido en Venezuela bajo Hugo Chávez se instaló en el país insular. Las marchas de protesta empezaron a ser puntualmente replicadas, y en ocasiones enfrentadas físicamente con el resultado de muchos heridos y algunos muertos, por contramanifestantes lealistas que aseguraban estar dispuestos a todo para defender al presidente y el Gobierno, desde el cual recibían expresiones de justificación. La aparición de barricadas en la capital, la proliferación de patrullas de "autodefensa" a cargo de las "organizaciones populares" de la FL y la inhibición de las fuerzas del orden alarmaron a la comunidad empresarial, que acusó a las autoridades políticas de tolerar un "clima de terror" en el país. El 4 de diciembre buena parte de la actividad comercial, bancaria y escolar cesó por la huelga nacional convocada por las asociaciones patronales y estudiantiles. En Cap-Haïtien, Gonaïves y Petite Goâve, al oeste de Puerto Príncipe, la PNC se enfrentó a los manifestantes.

Aristide se mostró porfiado y desafiante: no tenía ninguna intención de dimitir, sus oponentes lo único que pretendían era "sabotear el progreso de Haití" y los proveedores de fondos estaban socavando la estabilidad del país. La situación realmente se enquistó por la incapacidad de unos y de otros para consensuar un adelanto electoral, el numantinismo de Aristide y el fracaso de la oposición civil a la hora de capitalizar todo el malestar social en auge y el descontento de la comunidad internacional. Lo único que cambió a lo largo de 2003 fue el nivel de la violencia, siempre hacia arriba.

De estratagema populista tacharon los detractores del presidente su decreto del 4 de abril de 2003 por el que el vudú era reconocido como "religión de pleno derecho", con un estatus legal similar al del Catolicismo dentro del Estado aconfesional que asienta la Constitución de 1987; en lo sucesivo, los sacerdotes vuduístas podrían solicitar al Gobierno licencia para practicar bautizos, celebrar matrimonios y conducir funerales. Estudiosos y practicantes de este culto sincrético y popular que hunde sus raíces en las creencias traídas en el siglo XVIII por los esclavos africanos procedentes del golfo de Guinea acogieron encantados la sorprendente iniciativa presidencial, en un país del que muchas veces se ha dicho, medio en serio, medio en broma, que es "un 80% católico y un 100% vuduísta".

A mediados de mayo el Gobierno anunció con satisfacción que había alcanzado un acuerdo con el FMI (instado por la OEA para que fuera flexible) sobre la recepción de un crédito de entre 100 y 150 millones de dólares para financiar el crecimiento y luchar contra la pobreza condicionado a la presentación y el cumplimiento durante 12 meses de un plan de estabilización del gourde con las metas de reducir el déficit público del 5,2% al 2,7% y la inflación del 13% al 10% anual. Dos meses después fue el BID el organismo multilateral de crédito que accedió a aflojar su faltriquera, inyectando 220 millones a programas educativos y sanitarios del Gobierno.

Sin embargo, las buenas noticias desde el exterior fueron opacadas por el cada vez más sombrío panorama interno. El 25 de julio pistoleros no identificados emboscaron una comitiva del Ministerio del Interior en una carretera del departamento de Centre y mataron a cuatro funcionarios. Con estas víctimas ascendían a 25 las personas asesinadas por bandas de dudosa naturaleza -sicarios políticos o bandoleros sin escrúpulos, o ambas cosas a la vez- en el altiplano central desde comienzos de año. El 22 de septiembre fue encontrado en la cuneta de una carretera local en la localidad costera de Saint Marc el cadáver balaceado del Amiot Métayer, el hampón revuelto contra Aristide después de haberle prestado sus servicios, lo que desató algaradas de los enfurecidos integrantes del Ejército Caníbal. El 25 de noviembre recibió la visita de los pistoleros en su residencia de Cap-Haïtien Jean-Robert Lalane, activista en la coalición opositora Frente del Distrito Norte y apologeta de la dimisión de Aristide desde los micrófonos de su emisora Radio Maxima; Lalane resultó herido en el atentado y salvó la vida.

En diciembre, la crisis entró en un punto aparente de no retorno. Puerto Príncipe se convirtió en el centro de manifestaciones antigubernamentales prácticamente diarias con los estudiantes como punta de lanza. La intervención contundente de las fuerzas antidisturbios y las bandas de civiles lealistas organizados, los violentos chimeres, dejó una retahíla de heridos en el otro bando. Varias estaciones de radio privadas se vieron obligadas a suspender sus emisiones por las agresiones y las amenazas de turbas que, cada vez con menos disimulo, gozaban del patrocinio y el respaldo del Gobierno. Incluso el rector de la Universidad, Pierre-Marie Pacquiot, fue apaleado en un asalto al recinto académico y tuvo que ser hospitalizado. En todo el país, los fallecidos por la violencia política desde mitad de septiembre sumaban la cuarentena.

En estas tristes condiciones se conmemoró el 1 de enero de 2004 el bicentenario de la proclamación de la independencia, primera de una república negra, por los generales Dessalines, Pétion y Christophe, continuadores de la lucha emprendida en 1791 por esclavo liberto Toussaint L'Ouverture; entonces, la liberación de los franceses costó una enorme efusión de sangre, y ahora, los estallidos de violencia que habían jalonado estos dos siglos se cernían sobre la presidencia de Aristide, a punto de pasar a los anales políticos de este malhadado país como el último en una larga lista de tribunos populares que, más tarde o más temprano, por autoritarismo, autismo o incompetencia, terminaron arruinando las esperanzas de las masas de desheredados que los habían proyectado al poder y quedaron abocados a la caída.

La presencia en Puerto Príncipe del presidente sudafricano Thabo Mbeki con motivo del aniversario de la independencia suscitó esperanzas de que este país pudiera realizar una labor de mediación neutral, pero el propio huésped se encargó de descartar esa posibilidad; a cambio, Mbeki anunció la próxima firma de unos acuerdos de cooperación bilaterales y la concesión de 1,5 millones de dólares para sufragar las festividades del bicentenario. Por su

parte, la llamada Plataforma Democrática de la Sociedad Civil y de los Partidos Políticos de la Oposición (PD) presentó una "alternativa de transición" consistente en la salida del "régimen irresponsable, criminal y despótico" de Aristide y su sustitución por un presidente interino elegido por la Corte de Casación y asistido por un Consejo de Gobierno de transición con mandato hasta la celebración de elecciones. La CARICOM recibió en Jamaica a una delegación de la Plataforma, a la que propuso la designación de un primer ministro independiente y el despliegue de una fuerza policial multinacional. Aristide se mostró dispuesto a negociar el nombramiento de un nuevo primer ministro y un gobierno abierto a la FL, los partidos de la oposición y la sociedad civil, pero insistió en agotar su mandato en 2006. La PD dejó claro que la dimisión de Aristide y la disolución de los brutales chimeres eran precondiciones de cualquier arreglo de la crisis.

El progresivo enconamiento del conflicto, con demasiado odio y resentimiento desatados, no propiciaba la facilitación extranjera. El 5 de febrero, cuando los muertos en el último medio año superaban los 50, los espectros de la anarquía generalizada, la devastación de las infraestructuras del país y la guerra civil asomaron en provincias con la captura de Gonaïves, emblema de la independencia nacional por ser el epicentro de la revuelta anticolonial de los esclavos y libertos en el siglo XVIII -amén de origen a finales de 1985 del alzamiento que terminó derrocando a Duvalier semanas después-, a manos de las huestes reorganizadas del Ejército Caníbal, que ahora se hacía llamar Frente de Resistencia Revolucionario de Artibonite (FRRRA) y, sin solución de continuidad, también Frente para la Liberación y la Reconstrucción Nacionales (FLRN), el cual no perdonaba el asesinato de su jefe Amiot Métayer. Aparentemente, esta banda de malhechores con pruritos de guerrilla de liberación pasó a estar dirigida por el hermano del ejecutado, Butteur Métayer, y dos de sus lugartenientes, Winter Etienne y Milfort Ferdinand, alias Ti Will, los cuales se proclamaron respectivamente jefe regional de la Policía, alcalde y comisario de la "ciudad liberada" de Gonaïves.

Los rebeldes, comportándose como hordas de saqueadores y asesinos, tomaron los edificios gubernamentales y las comisarías, vaciaron la prisión y pusieron en fuga a los agentes de la PNH no sin antes linchar hasta la muerte a algunos de ellos. Dos días después, el intento de 150 policías de recuperar la ciudad fracasó estrepitosamente con el resultado de 18 muertos por ambas partes. Para el Gobierno, quienes se habían hecho fuertes en Gonaïves eran "terroristas" con pretensiones de un "golpe de Estado". La portuaria Saint Marc, al sur de Gonaïves y también en el departamento de Artibonite, cayó igualmente en manos del FRRRA/FLRN y fue pasto de un pillaje que no respetó ni las llantas de los vehículos.

El 10 de febrero los gubernamentales anunciaron la reconquista de Saint Marc en batalla campal a la vez que Grand-Goâve, Dondon y otras localidades, con lo que contuvieron el avance de la rebelión hacia el sur y Puerto Príncipe, si bien esta victoria no iba a poder sostenerse por la enorme debilidad, cuantitativa y cualitativa, de la única fuerza armada que podía oponer Aristide a unos enemigos extremadamente agresivos y a los que no les faltaban ni pertrechos, ni reclutas ni apoyo de los paisanos. La reacción vengativa de los chimeres por los sucesos en el centro-norte no se hizo esperar, y en Cap-Haïtien prendieron fuego a los edificios que alojaban a dos radios antigubernamentales. También se reportaron desmanes revanchistas en las ciudades recuperadas. En Puerto Príncipe, los partidos de la PD estaban divididos sobre si brindar respaldo político a la caótica insurgencia armada, cuyas confusas proclamas patrióticas y democráticas chirriaban con las atrocidades que perpetraban, o si mantener las distancias y seguir apostando por el cambio pacífico; por el momento prevaleció lo segundo.

El 13 de febrero Aristide comunicó a la OEA y la CARICOM que aceptaba su propuesta de

enviar una fuerza policial internacional y se sintió vindicado por la afirmación del secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, de que ni su país ni la comunidad internacional iban a aceptar un desenlace inconstitucional de la crisis, palabras que volvían a reflejar, sobre todo, el temor a que un colapso del régimen desatara el éxodo de miles de haitianos por mar intentando llegar a Guantánamo o a Florida.

Con todo, sobre el terreno el balance de fuerzas se estaba desnivelando inexorablemente en contra de Aristide. El día 15, las dos hijas del presidente tomaron un avión que les puso a buen recaudo en Fort Lauderdale, Florida. El 16, Hinche, capital del departamento de Centre, fue capturada por una exigua tropa de mercenarios que tenía como jefe al mulato Louis-Jodel Chamblain, antiguo sargento del Ejército y uno de los jefes de los paramilitares del FRAPH durante la dictadura de Cédras, sobre el que pendían dos condenas a cadena perpetua en rebeldía por crímenes políticos y que recientemente se había infiltrado desde la República Dominicana junto con Guy Philippe. Los dos facciosos amenazaron con un fulgurante avance sobre Puerto Príncipe y entraron en conversaciones con el FLRN para coordinar sus respectivas insurgencias. La fusión de las fuerzas a las órdenes de los comandantes Métayer, Etienne, Chamblain y Philippe dio lugar al Frente de Reconstrucción -también referido a veces como de Resistencia- Nacional (FRN).

La virtual guerra civil que asolaba el país americano tomaba por momentos el cariz de una conflagración propia de África occidental: una rebelión caótica y sin dirección unificada, la emergencia de señores de la guerra ávidos de conquistar la capital y sin un programa político creíble, y el hundimiento de los servicios elementales a lo largo y ancho del país, amenazando con provocar una catástrofe humanitaria. La caída de Hinche y la entrada en escena de Chamblain y Philippe, viejos enemigos de Aristide con los bolsillos repletos de dólares de dudosa procedencia, desataron todas las alarmas en el Gobierno, que hasta entonces había intentado restar gravedad a la crisis y asegurado su capacidad para derrotar a los insurrectos.

Aristide y el primer ministro Neptune urgieron a la comunidad internacional para que interviniese con una fuerza de paz, pero de París y de Washington sólo recibieron expresiones de respaldo y exhortos a hallar una "solución política", si bien los franceses se mostraron más receptivos que los estadounidenses al envío de soldados de interposición sin mediar un cese de hostilidades en firme. El Departamento de Estado empezó a dar signos de impaciencia e informalmente pidió a Aristide que considerara opciones como la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas y la dejación del poder a un órgano de gobierno con carácter temporal hasta la investidura del ganador de esos comicios. Ni Aristide, que se ofreció a "dar la vida" para "defender la democracia en el país", aceptó aquel extremo, ni la oposición civil, y con más énfasis el FRN, dieron su brazo a torcer en la posibilidad de una intervención militar extranjera, que obviamente contravenía sus intereses.

Temiendo quedarse solo, el 21 de febrero Aristide aceptó de buen grado el plan internacional elaborado con el concurso de los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Canadá, más la OEA y la CARICOM, según el cual debía nombrar un nuevo primer ministro, formar un gobierno de unión nacional con los partidos de la PD, delegar el control sobre una nueva fuerza de Policía y convocar elecciones legislativas anticipadas manteniéndose él en el cargo hasta el final del mandato. En resumidas cuentas, se trataba de un plan abiertamente favorable. Sin embargo, el FRN y la PD, viendo la victoria al alcance de la mano, se apresuraron a declarar que ya no había otra salida que la marcha incondicional del ex salesiano.

La misión internacional concedió de plazo hasta la última hora del día 23 al conjunto de la oposición haitiana para que se plegara al plan de paz, pero ésta no se dejó impresionar. El 22, los milicianos de Philippe se adueñaron de Cap-Haïtien sin gran esfuerzo y provocaron las destrucciones de rigor, mientras que otro grupo del FRN se presentó en los arrabales de Puerto Príncipe con estrépito de tiros, provocando el pánico en la capital y excitando los ánimos de los milicianos chirenes, los únicos que parecían estar dispuestos a resistir ante el abandono de sus puestos por un número crecientes de policías. Las incursiones rebeldes se aproximaron peligrosamente hasta el barrio de Place Cazeau, a tiro de piedra de la residencia privada de Aristide.

El 23, la administración de George W. Bush despachó un pelotón de marines para proteger la embajada estadounidense mientras que Francia pidió a sus nacionales que abandonasen el país. Cuando el ultimátum internacional a los rebeldes expiró sin novedad, la Secretaría de Estado de Estados Unidos les concedió otras 24 horas para que "reflexionaran", pero tampoco en esta ocasión se recibió respuesta. El 25, impotente, Aristide declaró a los corresponsales extranjeros que, o la comunidad internacional intervenía para parar a los "terroristas y criminales", o todos iban a ver "miles de personas muertas" en Puerto Príncipe, donde las barricadas y los puestos de guardia levantados por una heteróclita, pero numerosa, tropa de policías, chirenes y voluntarios civiles hacían presagiar, ciertamente, un baño de sangre cuando llegasen los sediciosos. El presidente aseguró estar en condiciones de lanzar contra los atacantes a "cerca de un millón" de partidarios de entre los 2 millones y medio de habitantes.

La perspectiva de encontrar la primera resistencia fuerte en la capital disuadió de lanzar un asalto inmediato a Philippe, que justificó el parón de su avance para "dar una oportunidad a la paz", aunque a Aristide le advirtió que, si le capturaban, le juzgarían por el "crimen de alta traición". El desafío y las amenazas de los rebeldes precipitaron la decisión de Francia y Estados Unidos de desplegar una fuerza de interposición con carácter urgente, pero con una mudanza política fundamental: la presidencia de Aristide se consideraba indefendible ya y, en consecuencia, retiraban su apoyo al mandatario. Para Aristide, este fue el golpe de gracia. El día 27, el mismo día en que el Gobierno perdía las ciudades de Cayes y Mirebalais, y los pillajes y los enfrentamientos causaban una decena de muertos en Puerto Príncipe, los gobiernos de Francia, Estados Unidos y Canadá solicitaron implícitamente la marcha de Aristide al instarle a que "extrajera las consecuencias" de la crítica situación.

La primera reacción del presidente fue no darse por enterado de la demanda de dimisión, pero en menos de 48 horas los hechos consumados produjeron el acto final. En la noche del sábado 28 sostuvo con diplomáticos franceses y estadounidenses una reunión de la que por el momento no emanaron detalles pero que se presumió tormentosa. El resultado de este encuentro fue la firma por Aristide de una carta de renuncia que, redactada en créole, decía: "la Constitución no debe ser escrita con la sangre del pueblo haitiano. Si esta noche mi renuncia es la decisión que puede evitar un baño de sangre, estoy de acuerdo en irme. Acepto marcharme en la esperanza de que habrá vida, y no muerte". El domingo, 29 de febrero, por la mañana temprano, el ya ex mandatario, con la banda presidencial colgándole todavía del hombro - luego, presentando la misma guisa que en su apoteósico retorno en octubre de 1994- se dirigió al aeropuerto, se subió a un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y despegó con rumbo desconocido. Un reducido grupo de personas le acompañaba, entre ellas su esposa, su cuñado y dos guardaespaldas.

Todo en el mismo día, Boniface Alexandre, presidente de la Corte de Casación del Supremo, juraba la asunción de las funciones de presidente provisional de la República tal como establece la Constitución en caso de vacancia del presidente titular; el FRN anunció su aceptación del plan de paz internacional y la deposición de las armas, luego finalmente no se iba a producir la invasión violenta de Puerto Príncipe; el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó con la resolución 1.529 el despliegue automático de una Fuerza Multinacional Interina (FMI) por un período inicial de tres meses; y, comenzaron a llegar las avanzadillas, un centenar largo de marines de Estados Unidos y unas decenas de soldados canadienses de operaciones especiales, del contingente internacional cuya fuerza prevista era de 3.600 hombres. En las horas y días siguientes, la FMI iba a ir tomando cuerpo en Puerto Príncipe y otros puntos sensibles del país con la adición de más unidades estadounidenses y canadienses, y la incorporación de efectivos franceses y chilenos.

El 1 de marzo, mientras Philippe, Chamblain y sus hombres, reciamente armados y vistiendo prendas militares, entraban entre los vítores de sus partidarios en un Puerto Príncipe aterrorizado por los chimeres en la víspera y se plantaban ante el Palacio Nacional con pretensiones de investirse de poderes militares nacionales antes de que Estados Unidos les quitara la idea de la cabeza y les obligara a desmovilizar a sus huestes, el avión de Aristide aterrizó en el aeropuerto de Bangui, capital de la República Centroafricana, después de hacer escala en la isla caribeña de Antigua. El sorprendente destino parecía ser un alto provisional, hasta encontrar un país de acogida que podría ser Sudáfrica. El Gobierno de Panamá le había ofrecido el asilo y por eso se conjeturó con un exilio en el país centroamericano, que, de haberse producido, habría colocado a Aristide en la irónica paradoja de tener al general Cédras como compañero de infortunio. Costa Rica también se ofertó como país de exilio, en este caso temporal. En la confusión que rodeó estas horas, se habló de lugares tan dispares como Marruecos, Taiwán y la Guayana Francesa como aquellos en los que Aristide podría emprender su nueva vida.

El mismo 1 de marzo tenían lugar gestiones discretas con el Gobierno sudafricano para el otorgamiento del asilo cuando Aristide realizó desde el apartamento en Bangui puesto a su disposición por el presidente centroafricano, el general François Bozizé (irónicamente, un dictador militar que hacía justo un año había derrocado y condenado al exilio al anterior mandatario civil elegido en las urnas, Ange-Félix Patassé), unas sorprendentes afirmaciones a la cadena CNN vía telefónica que crearon una controversia añadida sobre los dramáticos acontecimientos en Haití.

Según el ex presidente, en la noche del sábado una comitiva de "agentes" y "militares" estadounidenses se presentó en su mansión -más tarde saqueada por las turbas, en su sótano se encontró una caja fuerte camuflada que contenía 350.000 dólares en efectivo pero en mal estado de conservación, billetes que al parecer Aristide y su esposa renunciaron a llevarse, no así el dinero que supuestamente habían atesorado otras dos cajas halladas vacías- y le obligó a firmar un documento por el que entregaba el poder bajo la amenaza de que en caso contrario habría un "baño de sangre" y "miles de personas serían asesinadas". Siempre según en la versión del antiguo sacerdote, una vez hecho lo que se le pedía, sus captores le llevaron al aeropuerto y le subieron al avión contra su voluntad sin decirle a dónde le llevaban, todo lo cual no podía calificarse sino de "golpe de Estado". En los días siguientes, el mandatario depuesto reiteró sus mensajes porfiados, hizo un llamamiento a la "resistencia pacífica" de sus seguidores frente a la "ocupación" de Haití y los rebeldes "narcotraficantes" y "terroristas", e insistió en que él seguía siendo "el presidente democrático electo".

El Gobierno de Washington desmintió tajantemente que Aristide hubiese sido "secuestrado" o forzado a tomar decisiones por personal civil o militar de Estados Unidos, y aseguró que el mandatario había solicitado la custodia de fuerzas de seguridad a la Embajada para asistirle en la evacuación. Los gobiernos de la CARICOM, con el jamaicano de Percival Patterson a la cabeza, expresaron su profundo malestar por la implicación de "partes occidentales" en la "sospechosa" partida de Aristide, demandaron una investigación internacional independiente de las alegaciones del ex presidente y decidieron no enviar tropas a la FMI. En opinión de Patterson, si se demostraba que Aristide había sido empujado a dimitir y huir contra su voluntad, "Haití y los líderes y gobiernos de toda la región elegidos democráticamente" estarían ante un "precedente muy peligroso".

El 4 de marzo, el Gobierno sudafricano anunció que concedería el asilo a Aristide si éste lo solicitaba, pero el ex presidente tenía otros planes en este momento. El 15 de marzo, luego de tomar posesión en Puerto Príncipe el Gobierno apartidista presidido por Gérard Latortue, antiguo ministro de Exteriores y funcionario internacional sin filiación política, que fue elegido por un "Consejo de Sabios" de siete miembros con el visto bueno de la comunidad internacional y de la potencia tutelar, Estados Unidos, Aristide partió de Bangui compartiendo vuelo con una delegación de legisladores estadounidenses y jamaicanos, así como con miembros del lobby afroamericano prohaitiano TransAfrica (que sustentaba la teoría de una conspiración urdida por la CIA, el subsecretario de Estado Roger Noriega y el embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Negroponte, para echar a Aristide del poder), y tomó tierra en el país caribeño en respuesta a la invitación cursada por el primer ministro Patterson de una estancia de 10 semanas en la isla.

Las nuevas autoridades haitianas y el Gobierno de Washington reaccionaron negativamente a este viaje por creer que atizaría las tensiones en Haití, pero el Gobierno de Kingston lo justificó por razones familiares, para que el huésped pudiera reencontrarse con sus hijas venidas desde Nueva York. El 22 de marzo llegó la noticia de que el Gobierno de Nigeria (que ya brindaba un exilio condicionado y sumamente polémico al antiguo déspota liberiano Charles Taylor, removido del poder en Monrovia en agosto de 2003 en unas circunstancias, ciertamente, muy similares a las acaecidas en Puerto Príncipe días atrás), otorgaba el asilo temporal a Aristide a petición de la CARICOM. Con este cambio, Patterson respondía a las protestas del ejecutivo de Latortue, quien, por su parte, estaba generando otra fuerte controversia por su actitud amistosa hacia Philippe y su soldadesca, a los que llamó "combatientes por la libertad", y a los gestos de patente desagrado de la Casa Blanca.

Sin embargo, la peripecia de Aristide prometía ser prolija, ya que el interesado rehusó dar su visto bueno a este plan de instalarse en Nigeria, a la vez que los mandatarios de la CARICOM hablaban de promover en la Asamblea General de la ONU un debate que clarificase la posible injerencia exterior en los sucesos que condujeron al desenlace del 29 de febrero. El 13 de mayo el Gobierno sudafricano confirmó la concesión del asilo temporal a Aristide, quien no precisó cuando iba a desplazarse a aquel país.

Jean-Bertrand Aristide está en posesión de los premios Óscar Romero, Martin Luther King al Liderazgo Político y Ecuménico, Aix-la-Chapelle de la Paz y de los Derechos Humanos y la Educación de la UNESCO. Ha escrito los libros *Pourquoi?* (1978), *Soulever la table* (1986), *100 vese dechoukaj* (1986), *La vérité en vérité: dossier de défense présenté à la Sacrée Congrégation pour les Religieux et les Instituts Séculiers* (1989), *In the Parish of the Poor* (1990), *Haiti, un an après le coup d'État* (1992), *Tout homme est un homme* (1992),

Théologie et politique (1992), Peace, Justice and Power: My Return to Haiti, the United States, and the New World Order (1995), Dignity (1995), Eyes of the Heart: Seeking a Path for the Poor in the Age of Globalization (2000, en coautoría) y Media's Dark Age: The Rise & Fall of Western Journalism (2004, en coautoría), así como Aristide: An Autobiography, de 1992.

(Cobertura informativa hasta 24/5/2004)